



# Asamblea General

Distr. general  
18 de septiembre de 2020  
Español  
Original: inglés

## Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

### Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 88º período de sesiones, 24 a 28 de agosto de 2020

#### Opinión núm. 37/2020, relativa a Zayar Lwin, Paing Phyto Min, Zaw Lin Htut, Kay Khine Htun, Paing Ye Thu y Su Yadana Myint (Myanmar)\*

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.
2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 26 de marzo de 2020 al Gobierno de Myanmar una comunicación relativa a Zayar Lwin, Paing Phyto Min, Zaw Lin Htut, Kay Khine Htun, Paing Ye Thu y Su Yadana Myint. El Gobierno no ha respondido a la comunicación. Myanmar no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
  - a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
  - b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
  - c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

\* Seong-Phil Hong no participó en el examen del presente caso.



d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

### **Información recibida**

#### *Comunicación de la fuente*

#### a) Contexto

4. La fuente proporcionó la siguiente información sobre las personas a que se refiere el presente caso:

a) Zayar Lwin es un ciudadano de Myanmar de 29 años de edad. Es miembro destacado de la Confederación de Sindicatos de Estudiantes Universitarios. Habitualmente reside en Rangún;

b) Paing Phyto Min es un ciudadano de Myanmar de 23 años de edad. Es el Presidente del Sindicato de Estudiantes Universitarios de Dagon y miembro de la Confederación de Sindicatos de Estudiantes Universitarios. Habitualmente reside en Rangún;

c) Zaw Lin Htut es un ciudadano de Myanmar de 22 años de edad. Es fotoperiodista y miembro de la Confederación de Sindicatos de Estudiantes Universitarios. Habitualmente reside en Rangún;

d) Kay Khine Htun es una ciudadana de Myanmar de 22 años de edad. Es enfermera y miembro de la Confederación de Sindicatos de Estudiantes Universitarios. Habitualmente reside en Rangún;

e) Paing Ye Thu es un ciudadano de Myanmar de 29 años de edad. Es miembro destacado de la Confederación de Sindicatos de Estudiantes Universitarios. Habitualmente reside en Rangún;

f) Su Yadana Myint es una ciudadana de Myanmar de 25 años de edad. Trabaja como ayudante de formación en el Instituto de Estrategia y Política y es miembro del Comité de la Juventud de la Región de Rangún y de la Confederación de Sindicatos de Estudiantes Universitarios. Habitualmente reside en el municipio de Dagon.

5. Según la fuente, los seis forman parte de Peacock Generation, compañía de poesía satírica que realiza espectáculos de una forma de representación artística tradicional (*thangyat*) que históricamente se ha utilizado para expresar opiniones políticas a través de la sátira. La fuente informa de que la Consejera de Estado puso fin a la censura oficial de las letras utilizadas en las representaciones de *thangyat* en 2016, pero la reintrodujo en 2017. Sin la aprobación del órgano censor, los intérpretes de *thangyat* no pueden reservar escenarios financiados por el Estado.

6. La fuente informa al Grupo de Trabajo de que Zayar Lwin, Paing Phyto Min, Zaw Lin Htut, Kay Khine Htun y Paing Ye Thu son intérpretes que participaron en una representación al aire libre de *thangyat* en Rangún durante el Festival Thingyan (de Año Nuevo) en abril de 2019. Su Yadana Myint grabó las actuaciones y las publicó en los medios sociales. Al parecer, las letras de la representación incluían llamamientos a destituir a los legisladores nombrados por las Fuerzas Armadas, críticas a la participación de esta institución en la política y los negocios y un llamamiento a la Corte Penal Internacional para que enjuiciara a sus miembros. Según la fuente, los artistas llevaban ropa militar, factor que motivó su arresto.

7. La fuente afirma que, aunque no se los nombró expresamente en la representación, numerosos miembros de las Fuerzas Armadas se querellaron contra los intérpretes y contra Su Yadana Myint por presuntos delitos de injurias y “difamación en línea”.

b) Arresto y detención preventiva

8. Según la fuente, Zayar Lwin, Paing Phyto Min, Paing Ye Thu y Su Yadana Myint fueron arrestados el 15 de abril de 2019. Los mantuvieron retenidos y los interrogaron durante varias horas en una comisaría de policía y los inculparon por infringir el artículo 66 d) de la Ley de Telecomunicaciones. Los citaron a comparecer en una audiencia el 5 de septiembre de 2019. Zayar Lwin, Paing Phyto Min y Paing Ye Thu también fueron inculcados en virtud del artículo 505 a) del Código Penal y citados a comparecer en una audiencia el 22 de abril de 2019.

9. Kay Khine Htun fue arrestada el 19 de abril de 2019 mientras trabajaba en el Hospital Infantil de Rangún. Posteriormente quedó en libertad y fue citada a comparecer ante el Tribunal Municipal de Mayangone el 22 de abril de 2019 para la primera audiencia relativa a los cargos presentados en virtud del artículo 505 a) del Código Penal, junto con Zaw Lin Htut y los tres intérpretes que habían sido arrestados el 15 de abril de 2019.

10. Zaw Lin Htut fue detenido entre el 15 y el 22 de abril de 2019, fecha en que compareció ante el Tribunal Municipal de Mayangone en la audiencia relativa a los cargos presentados en virtud del artículo 505 a) del Código Penal.

11. Su Yadana Myint fue arrestada de nuevo, el 17 de mayo de 2019, en relación con otros cargos. Compareció ante el Tribunal Municipal de Botahtaung el mismo día, junto con los cinco intérpretes, por nuevos cargos presentados en virtud del artículo 505 a) del Código Penal. Los cargos fueron presentados contra ellos por otra persona en relación con las mismas actuaciones del Festival Thingyan.

12. La fuente informa de que los arrestos del 15 de abril de 2019 y el de Kay Khine Htun, el 19 de abril de 2019, fueron practicados por agentes de policía de la comisaría del municipio de Mayangone, de Rangún. El arresto de Su Yadana Myint el 17 de mayo de 2019 fue practicado por agentes de policía de la comisaría del municipio de Botahtaung, de Rangún. La decisión de arrestar a los miembros del grupo los días 15 y 19 de abril de 2019 fue adoptada por el Tribunal Municipal de Mayangone, de Rangún, y la decisión de arrestar a Su Yadana Myint el 17 de mayo de 2019 fue adoptada por el Tribunal Municipal de Botahtaung, de Rangún.

13. La fuente afirma que a ninguna de las personas mencionadas se le mostró una orden judicial u otra decisión de una autoridad pública cuando fueron arrestadas. Según la fuente, los arrestos se practicaron por presuntos delitos tipificados en el artículo 505 a) del Código Penal y el artículo 66 d) de la Ley de Telecomunicaciones. Ambos delitos requieren la presentación de una orden judicial. Se trata de los delitos de injurias a las Fuerzas Armadas y difamación a través de una red de telecomunicaciones.

14. Según la fuente, el artículo 505 del Código Penal reza así:

Quienquiera que formule, publique o distribuya cualquier declaración, rumor o noticia,

a) Con la intención de causar, o que pueda causar, que un oficial, soldado, marinero o aviador del Ejército de Tierra, la Armada o la Fuerza Aérea se amotine o desatienda o incumpla de alguna otra manera su deber como tal, [...] será castigado a una pena de prisión de hasta dos años, a una multa o a ambas. La fuente cita también el artículo 66 de la Ley de Telecomunicaciones, en su forma enmendada, que dice así:

Quienquiera que cometa [uno de los actos enumerados en el artículo 66 d)] y sea declarado culpable, será castigado a una pena de prisión no superior a dos años, a una multa no superior a 1 millón de kyats, o a ambas.

[...]

d) Extorsionar, difamar, molestar o amenazar a cualquier persona utilizando cualquier red de telecomunicaciones.

15. La fuente sostiene que tanto el artículo 505 a) del Código Penal como el artículo 66 d) de la Ley de Telecomunicaciones se han utilizado para perseguir a disidentes políticos en los últimos años, con una frecuencia cada vez mayor. Según la fuente, en 2019 8 personas que habían criticado a las Fuerzas Armadas fueron acusadas en virtud del artículo 505 a) del Código Penal. Entre abril de 2016 y junio de 2017 se presentaron 61 denuncias por infracción del artículo 66 d) de la Ley de Telecomunicaciones, de las cuales al menos 7 fueron presentadas por las Fuerzas Armadas y 6 por el Gobierno. En muchos de esos casos, las personas denunciadas habían publicado en Internet contenidos críticos con el Gobierno o las Fuerzas Armadas. Entre 2018 y 2019, 61 personas fueron inculpadas en virtud del artículo 66 d) de la Ley de Telecomunicaciones, y 127 personas son enjuiciadas actualmente por “difamación en línea”.

16. Según la fuente, ante las acusaciones de que la Ley de Telecomunicaciones estaba redactada en términos demasiado imprecisos y poco específicos, y penalizaba injustamente la expresión de las opiniones en Internet, el Gobierno la enmendó en 2017. Con dicha enmienda se eliminaron algunas de sus disposiciones, se modificaron las condiciones de la libertad bajo fianza y se redujo la pena máxima. Sin embargo, la fuente señala que la versión enmendada sigue siendo incompatible con las normas jurídicas internacionales y que la Ley se sigue utilizando para silenciar a quienes critican al Gobierno y las Fuerzas Armadas.

17. Las seis personas pasaron un tiempo en prisión preventiva en los municipios de Mayangone y Botahtaung, de Rangún, tras ser acusadas de infringir el artículo 505 a) del Código Penal, el artículo 66 d) de la Ley de Telecomunicaciones o ambos. Dos miembros de las Fuerzas Armadas presentaron sendas querellas en los municipios mencionados en nombre de la institución en su conjunto.

18. Las seis personas ingresaron en la prisión de Insein en régimen de detención preventiva después de que se les denegara la libertad bajo fianza en sus primeras audiencias respectivas, celebradas el 22 de abril de 2019 en el caso de los cinco intérpretes y el 17 de mayo de 2019 en el de Su Yadana Myint. La fuente señala que, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal de Myanmar, toda persona acusada de un delito para el que no se pueda decretar la libertad bajo fianza puede quedar, no obstante, en libertad bajo fianza si es arrestada o detenida sin orden judicial por un agente de policía. La fuente reitera que así sucedió en el caso de las seis personas, dado que a ninguna de ellas se le presentó una orden antes de su arresto y detención.

19. La fuente señala que, aunque muchas otras personas detenidas por los mismos cargos han quedado en libertad bajo fianza, a las seis personas del presente caso se les denegó esa posibilidad. La fuente afirma que se ha denegado sistemáticamente la libertad bajo fianza a las personas detenidas en virtud del artículo 66 d) de la Ley de Telecomunicaciones que son acusadas de difamar a autoridades del Gobierno o a las Fuerzas Armadas.

c) Condenas y penas impuestas

20. Según la fuente, los seis miembros del grupo están involucrados en cuatro causas en las que se ha dictado sentencia. Los seis fueron declarados culpables de infringir el artículo 505 a) del Código Penal en el municipio de Botahtaung y condenados a un año de prisión con trabajos forzados. Los cinco intérpretes también fueron declarados culpables de ese delito en el municipio de Mayangone y condenados a un año de prisión con trabajos forzados.

21. Las seis personas fueron acusadas de infringir el artículo 66 d) de la Ley de Telecomunicaciones en el municipio de Botahtaung, y los cuatro miembros de la compañía que fueron arrestados el 15 de abril de 2019 fueron acusados de infringir la misma disposición en el municipio de Mayangone. En ambas causas se ha dictado ya sentencia. En la primera, Paing Phyto Min, Kay Khine Htun y Su Yadana Myint fueron declarados culpables y condenados a seis meses de prisión con trabajos forzados. En el municipio de Mayangone, los cuatro miembros del grupo que fueron arrestados el 15 de abril de 2019 fueron declarados culpables y condenados a seis meses de prisión con trabajos forzados.

22. La fuente informa de que, en conjunto, las seis personas pasarán 11 años en prisión por infringir el artículo 505 a) del Código Penal y 3,5 años por infringir el artículo 66 d) de la Ley de Telecomunicaciones. Sin embargo, no todos los juicios han concluido ya. Los miembros del grupo han sido inculcados también en virtud de esas dos disposiciones en el municipio de Pathein, aunque todavía no está claro cuándo se celebrará el juicio.

23. La fuente informa al Grupo de Trabajo de que, el 30 de octubre de 2019, los cinco intérpretes fueron condenados a un año de prisión en virtud del artículo 66 d) de la Ley de Telecomunicaciones por “atentar contra la reputación” de las Fuerzas Armadas durante una representación artística que se transmitió por Internet. Junto con Su Yadana Myint, recibieron una segunda pena de prisión el 19 de noviembre de 2019 en virtud del artículo 505 a) del Código Penal por mofarse de las Fuerzas Armadas en la misma representación. Desde entonces, Zayar Lwin, Paing Phyto Min, Kay Khine Htun, Paing Ye Thu y Su Yadana Myint han sido condenados en nuevas causas incoadas en virtud del artículo 66 d) de la Ley de Telecomunicaciones. Las seis personas siguen recluidas en la prisión de Insein.

24. Según la fuente, la difamación está tipificada como delito en Myanmar, a pesar de que las Naciones Unidas han recomendado en reiteradas ocasiones que se despenalice. La fuente recuerda que el Comité de Derechos Humanos ha declarado que la pena de prisión no es nunca adecuada en los casos de difamación<sup>1</sup>. En el presente caso, las seis personas han permanecido detenidas durante mucho tiempo, a un gran costo para sus familias, su educación y sus medios de vida, aunque no representan ningún peligro para ellas mismas ni para la sociedad y se puede confiar en que comparecerán ante el tribunal cuando sean citadas. La fuente sostiene que su detención es un castigo desproporcionado por infringir las disposiciones legales relativas a la expresión de las ideas propias.

25. La fuente informa al Grupo de Trabajo de que, aunque algunos miembros del grupo Peacock Generation ya han sido imputados por su activismo político, los casos de la presente comunicación son los primeros en que un miembro del grupo ha sido imputado por una representación de *thangyat*; de hecho, es la primera vez que se imputa a intérpretes de *thangyat* en el país desde que comenzó la transición democrática.

26. La fuente añade que no es la primera vez que Zayar Lwin y Paing Ye Thu son perseguidos por su activismo. Como miembros destacados de la Confederación de Sindicatos de Estudiantes Universitarios, el 30 de junio de 2015 organizaron en Rangún una manifestación para pedir la dimisión de los diputados nombrados por las Fuerzas Armadas. Poco después de la manifestación, la policía los arrestó a ambos y a un tercer organizador. Todos ellos fueron juzgados por la presunta infracción del artículo 18 de la Ley de Reuniones y Manifestaciones Pacíficas y el artículo 505 b) del Código Penal. Finalmente quedaron en libertad el 8 de abril de 2016, cuando la Consejera de Estado indultó a un grupo de “presos de conciencia” entre los que se encontraban. Los otros cuatro miembros del grupo no tienen antecedentes penales.

#### d) Análisis de las infracciones

27. La fuente sostiene que la detención de los miembros del grupo Peacock Generation es arbitraria con arreglo a las categorías II y III.

28. En relación con la categoría II, la fuente sostiene que la imputación de las seis personas mencionadas constituye una violación del derecho a la libertad de expresión, garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 354 de la Constitución de Myanmar, así como por la Ley de Protección de la Privacidad y la Seguridad de los Ciudadanos.

29. Según la fuente, el artículo 505 a) del Código Penal está redactado en términos imprecisos y demasiado genéricos. Dicho artículo tipifica como delito la publicación o distribución de “cualquier declaración, rumor o noticia” con la intención de provocar que un miembro de las Fuerzas Armadas se amotine, pero no incluye una definición clara de

<sup>1</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34 (2011), relativa a la libertad de opinión y la libertad de expresión, párr. 47.

esos términos. Ello ha permitido a los tribunales aplicar el artículo libremente y, en el presente caso, utilizarlo para penalizar una expresión artística satírica de la opinión política.

30. Además, las representaciones de *thangyat* constituyen, desde hace generaciones, un foro para tratar cuestiones sociales o políticas y, en ese sentido, contribuyen de manera significativa a la participación política en el país. Al publicar sus actuaciones en Internet, la intención del grupo Peacock Generation era fomentar el debate político en el país; la participación en el intercambio de opiniones sobre el comportamiento de las Fuerzas Armadas en una versión en línea de una plaza pública es un ejercicio de los derechos individuales. El enjuiciamiento de los miembros del grupo Peacock Generation por esas actuaciones viola su libertad de expresión de la opinión política a través del arte, que está protegida por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

31. La fuente señala que, en el presente caso, los tribunales consideraron que los derechos de los miembros del grupo Peacock Generation debían ser coartados porque sus expresiones constituían una difamación. Fueron acusados de “intimidación, injurias y molestias criminales” en virtud del artículo 505 a) del Código Penal y de “difamación en línea” en virtud del artículo 66 d) de la Ley de Telecomunicaciones. En el juicio, la fiscalía argumentó que la coartación de su libertad de expresión era admisible porque su actuación había atentado contra los derechos y la reputación de los querellantes, que eran todos miembros de las Fuerzas Armadas. La fuente señala que el derecho internacional no protege a nadie de las injurias ni de ninguna otra forma de crítica, ya sea intencional o no. El razonamiento expuesto en los fallos judiciales es una interpretación errónea de las normas jurídicas internacionales relativas a la difamación.

32. Las expresiones difamatorias deben presentar una amenaza específica y directa, y debe establecerse una conexión directa e inmediata entre la expresión y la amenaza<sup>2</sup>. La restricción de la libertad de expresión de los miembros del grupo no cumple la norma de la especificidad, ya que no se mencionó concretamente a ninguno de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Más bien, estos extrapolaron una amenaza personalizada de expresiones que solo criticaban a la institución en general. Además, las letras de las representaciones de *thangyat* no incluían una amenaza específica, dado que los llamamientos a actuar se limitaban a instar a la Corte Penal Internacional a que enjuiciara a miembros de las Fuerzas Armadas y a instar a esta institución a que dejara de injerirse en la política y los negocios. La fuente afirma que se trata de expresiones válidas de opinión política protegidas por el derecho internacional. Las restricciones a la libertad de expresión no deben obstaculizar el debate político<sup>3</sup>.

33. La fuente también afirma que, al imputar a los miembros del grupo por el carácter crítico de las letras, los tribunales establecieron que toda crítica de la función política de las Fuerzas Armadas podría considerarse delito y que quienes criticaran esa función podrían ser enjuiciados. Sin embargo, el derecho internacional no protege a las figuras e instituciones públicas, incluidos los oficiales militares y el ejército en general, de las críticas relacionadas con su cargo público<sup>4</sup>.

34. La crítica general a las Fuerzas Armadas de los miembros del grupo no conculcó los derechos individuales de los oficiales militares, aunque estos se sintiesen personalmente insultados. El órgano legislativo de Myanmar ha reconocido que imputar a alguien por “injurias” no se ajusta al derecho internacional. Cuando se aprobó la Ley de Telecomunicaciones en 2013, fue objeto de críticas generalizadas de la comunidad internacional por la redacción imprecisa y demasiado genérica del artículo 66 d). Se criticó específicamente a los tribunales por penalizar las “injurias”, en violación de las normas internacionales relativas a la difamación. La Ley de Telecomunicaciones fue enmendada posteriormente para eliminar el término “injuriar” del artículo 66 d). Sin embargo, en la práctica, la enmienda no ha afectado a la aplicación de la ley. Las “injurias” se han englobado en el término general de “difamación”, y los jueces no exigen a quienes se querellan que demuestren que la expresión litigiosa constituya una amenaza directa o

<sup>2</sup> *Ibid.*, párr. 35.

<sup>3</sup> *Ibid.*, párr. 28.

<sup>4</sup> *Ibid.*, párr. 38.

incluya información falaz. El hecho de que un oficial del ejército se sienta personalmente insultado es suficiente para justificar la coartación de todas las expresiones relacionadas con las Fuerzas Armadas. La fuente sostiene que ello constituye una clara violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

35. En relación con la categoría III, la fuente sostiene que la inobservancia de las normas internacionales relativas al derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, establecidas en los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es de tal gravedad que confiere carácter arbitrario a la privación de libertad de las seis personas.

36. La fuente observa que a ninguna de las seis personas se le presentó una orden judicial cuando se las arrestó. El hecho de no presentar una orden judicial infringe el Código de Procedimiento Penal, que exige que se presente en el momento del arresto en relación con toda presunta infracción de los artículos 500 y 505 a) del Código Penal.

37. Además, la fuente afirma que se denegó injustificadamente la libertad bajo fianza a las seis personas. Estas pasaron una cantidad significativa de tiempo en prisión preventiva, a pesar de que en el procedimiento penal solo debe recurrirse a ella como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima<sup>5</sup>. No había fundamento para afirmar que los miembros del grupo representaban una amenaza para la sociedad o para ellos mismos, o que no comparecerían cuando se les llamara a juicio.

38. Además, la fuente sostiene que las normas internacionales relativas a la prisión preventiva hacen hincapié en la importancia de que se celebre un juicio y se dicte sentencia en forma expedita<sup>6</sup>. Sin embargo, cada uno de los seis miembros de la compañía pasó casi un año en prisión preventiva por unos presuntos hechos que el derecho internacional considera de la jurisdicción civil. Las autoridades de Myanmar justifican la prisión preventiva aduciendo que la legislación interna considera la difamación un delito y no una cuestión de derecho civil. Sin embargo, los titulares de mandatos de los procedimientos especiales y otras instancias se han opuesto a la penalización de la difamación y al uso de la detención en casos de difamación<sup>7</sup>. Los órganos de las Naciones Unidas también han indicado que la difamación solo debería considerarse delito en los casos más graves y que la pena de prisión no es nunca adecuada<sup>8</sup>. Además, el hecho de que no se celebre un juicio en forma expedita podría tener un efecto disuasivo que restrinja excesivamente el ejercicio de la libertad de expresión de la persona en cuestión y de otras<sup>9</sup>.

39. La fuente sostiene que el 22 de mayo de 2019 se cometió otra violación del derecho a un juicio imparcial cuando los acusados comparecieron esposados ante el Tribunal Municipal de Mayangone. Los partidarios del grupo Peacock Generation que asistieron al juicio protestaron por el uso de las esposas, alegando que no estaba justificado en el caso de delincuentes no violentos. Al parecer, los agentes de policía respondieron que habían esposado a los acusados de acuerdo con las directrices del manual de la policía. Según la fuente, el hecho de esposar a los acusados incumple las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, en las que se establece que las esposas y otros medios de coerción solo deben utilizarse como medida de precaución contra una evasión durante un traslado, siempre que sean retirados en cuanto comparezca el recluso ante una autoridad judicial o administrativa<sup>10</sup>. Los cinco intérpretes comparecieron esposados ante el tribunal, a pesar de que no había motivos para creer que se lesionarían a sí mismos o a otros o que pudieran causar daños materiales, que son las únicas excepciones legales que justifican el uso de medios de coerción durante el juicio.

<sup>5</sup> Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), *Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal*, pág. 122. Disponible en [http://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium\\_2006\\_es.pdf](http://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_es.pdf).

<sup>6</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34, párr. 47.

<sup>7</sup> Véase [www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=87&IID=2](http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=87&IID=2).

<sup>8</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34, párr. 47.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> UNODC, *Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas*, pág. 10.

40. Además, las múltiples acusaciones y causas contra los miembros del grupo son un claro ejemplo de persecución y merman la eficiencia de los tribunales. Sobre cada una de las seis personas pesan entre tres y siete acusaciones distintas, en varios municipios, por el mismo presunto delito. Distintos oficiales militares se querellaron en cada uno de los municipios en que el grupo actuó durante el Festival Thingyan. Por ejemplo, Su Yadana Myint ha sido inculpada por una presunta infracción del artículo 66 d) de la Ley de Telecomunicaciones en los municipios de Botahtaung, Mayangone y Patheingyi.

41. La fuente sostiene que la presentación de distintas querellas por difamación contra los miembros del grupo en varios municipios obedece a una estrategia que los obliga a pasar meses, si no años, compareciendo ante los tribunales por las representaciones de *thangyat* que realizaron en abril de 2019. Algunos de los miembros del grupo han sido citados a comparecer ante los tribunales todas las semanas. Después de realizar el largo viaje hasta Rangún desde la prisión de Insein, muchas audiencias han sido aplazadas, obligándolos a perder el tiempo y a asumir costas adicionales por el día pasado en el tribunal.

42. La fuente señala que los miembros del grupo impugnaron inicialmente los cargos que se les imputaban y participaron en las actuaciones judiciales, pero desde entonces han decidido no apelar las decisiones ante el incumplimiento reciente del derecho internacional en materia de protección de los derechos fundamentales. La fuente concluye que, habida cuenta de la pauta de arrestos y condenas en virtud del artículo 505 a) del Código Penal y el artículo 66 d) de la Ley de Telecomunicaciones, no hay motivos para esperar que una mayor participación en los mecanismos judiciales oficiales dé lugar a una reparación, un remedio o una absolución.

43. El Grupo de Trabajo observa que el caso de Su Yadana Myint fue objeto de una carta de transmisión de denuncia enviada por el Grupo de Trabajo y otros tres titulares de mandatos de procedimientos especiales el 26 de septiembre de 2019<sup>11</sup>. El Grupo de Trabajo toma nota de las respuestas del Gobierno de fecha 28 de noviembre de 2019 y 2 de enero de 2020<sup>12</sup>. El caso de estas seis personas también fue objeto de un llamamiento urgente enviado por tres titulares de mandatos de procedimientos especiales el 20 de abril de 2020. Cuando se aprobó la presente opinión, el Gobierno no había respondido a esta última comunicación.

#### *Respuesta del Gobierno*

44. El 26 de marzo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno con arreglo a su procedimiento ordinario de comunicación, pidiéndole que, a más tardar el 25 de mayo de 2020, facilitara información detallada sobre la situación de Zayar Lwin, Paing Phyto Min, Zaw Lin Htut, Kay Khine Htun, Paing Ye Thu y Su Yadana Myint. El Grupo de Trabajo también solicitó al Gobierno que aclarara las disposiciones jurídicas que justificaban su detención, así como su compatibilidad con las obligaciones asumidas por Myanmar en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Además, el Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno a que garantizara la integridad física y mental de las seis personas.

45. El Grupo de Trabajo lamenta no haber recibido respuesta del Gobierno a esa comunicación. El Gobierno no solicitó una prórroga del plazo para responder, como se prevé en los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo.

46. El Grupo de Trabajo observa con preocupación que el Gobierno no ha aprovechado la oportunidad de responder a las alegaciones formuladas en el presente caso y en otras comunicaciones presentadas con arreglo al procedimiento ordinario de comunicación en los

<sup>11</sup> La carta de transmisión de denuncia puede consultarse en <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=24847>.

<sup>12</sup> Las respuestas del Gobierno pueden consultarse en <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadFile?gId=35023> y <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadFile?gId=35085>.



últimos años<sup>13</sup>. De hecho, el Gobierno no ha respondido al procedimiento ordinario de comunicación del Grupo de Trabajo desde 2013<sup>14</sup>. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a entablar un diálogo constructivo con respecto a todas las alegaciones de privación arbitraria de libertad.

### Deliberaciones

47. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

48. El Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones (véase A/HRC/19/57, párr. 68). En el presente caso, el Gobierno ha optado por no impugnar las alegaciones, en principio fiables, formuladas por la fuente.

#### i) Categoría I

49. La fuente afirma que los arrestos y la detención de los seis miembros del grupo Peacock Generation tuvieron lugar entre el 15 de abril y el 17 de mayo de 2019<sup>15</sup>. Zayar Lwin, Paing Phyo Min, Paing Ye Thu y Su Yadana Myint fueron arrestados el 15 de abril de 2019. Kay Khine Htun fue arrestada el 19 de abril de 2019. Zaw Lin Htut fue arrestado entre el 15 y el 22 de abril de 2019. Su Yadana Myint fue arrestada una vez más a raíz de nuevas acusaciones el 17 de mayo de 2019.

50. Según la fuente, todos esos arrestos tuvieron lugar sin que se presentara una orden judicial a los arrestados. Nada parece indicar que los arrestos se produjeran en flagrante delito, es decir, mientras se realizaban las actuaciones de *thangyat* o inmediatamente después<sup>16</sup>, lo que podría haber evitado la necesidad de una orden judicial. De hecho, algunos de los seis miembros del grupo claramente no estaban actuando cuando fueron arrestados, como Kay Khine Htun, que al parecer fue arrestada mientras trabajaba como enfermera en el Hospital Infantil de Rangún. La fuente afirma que la policía de los municipios de Mayangone y Botahtaung incumplió el Código de Procedimiento Penal, que obliga a la autoridad a presentar una orden de detención cuando se trata de determinados delitos, entre ellos los que presuntamente habían cometido las seis personas del presente caso.

51. El Grupo de Trabajo considera que la fuente ha presentado indicios razonables de que las autoridades no presentaron una orden judicial cuando arrestaron a las seis personas. El Gobierno no respondió a la comunicación del Grupo de Trabajo con arreglo a su procedimiento ordinario y, por lo tanto, no ha facilitado ninguna información o explicación para refutar las alegaciones de la fuente. El Grupo de Trabajo recuerda que, en sus conclusiones en casos anteriores relativos a Myanmar, determinó que las autoridades no habían presentado una orden judicial en el momento del arresto, lo que indica que las afirmaciones de la fuente son dignas de crédito<sup>17</sup>.

52. Como ha señalado anteriormente el Grupo de Trabajo, no basta con que exista una ley que autorice un arresto. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y

<sup>13</sup> Opiniones núms. 33/2016, 31/2014, 24/2014 y 6/2014. El Gobierno tampoco respondió a las comunicaciones del Grupo de Trabajo en relación con las opiniones núms. 49/2013, 23/2010, 12/2010 y 4/2010.

<sup>14</sup> El Gobierno presentó una respuesta en relación con las opiniones núms. 56/2013, 50/2013, 25/2011 y 28/2010, así como con otros casos anteriores.

<sup>15</sup> Aunque la fuente no hizo esta alegación en relación con la categoría I, el Grupo de Trabajo considera que procede examinarla en el marco de la categoría I.

<sup>16</sup> Opiniones núm. 9/2018, párr. 38; núm. 36/2017, párr. 85; núm. 53/2014, párr. 42; núm. 46/2012, párr. 30; núm. 67/2011, párr. 30; y núm. 61/2011, párrs. 48 y 49; y E/CN.4/2003/8/Add.3, párrs. 39 y 72 a).

<sup>17</sup> Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 33/2016, párr. 10; núm. 56/2013, párr. 8 h); núm. 49/2013, párr. 5; núm. 25/2011, párr. 20; y núm. 4/2010, párrs. 5 y 7.

aplicarlo mediante una orden judicial<sup>18</sup>. Cuando se arrestó a las seis personas del presente caso no se les presentó una orden judicial, lo que constituye una violación de los artículos 3, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos<sup>19</sup>. En consecuencia, las autoridades no establecieron un fundamento jurídico para arrestar a Zayar Lwin, Paing Phyto Min, Zaw Lin Htut, Kay Khine Htun, Paing Ye Thu y Su Yadana Myint.

53. Así pues, el Grupo de Trabajo considera que no había fundamento jurídico para detener a las seis personas mencionadas. Su detención es arbitraria con arreglo a la categoría I.

## ii) Categoría II

54. La fuente alega que las seis personas fueron privadas de su libertad a causa del ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de opinión y de expresión, protegido por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Según la fuente, las seis personas utilizaron letras durante las representaciones de *thangyat* en las que se pedía la destitución de los legisladores nombrados por las Fuerzas Armadas, se criticaba la participación de esta institución en la política y los negocios y se hacía un llamamiento a la Corte Penal Internacional para que enjuiciara a sus miembros. Los intérpretes llevaban ropa militar durante las actuaciones. Aunque no se los nombró expresamente en la representación, numerosos miembros de las Fuerzas Armadas se querellaron contra las seis personas por presuntos delitos de injurias y “difamación en línea”.

55. Según la fuente, las seis personas han sido enjuiciadas, declaradas culpables y condenadas únicamente por haber expresado pacíficamente sus opiniones políticas a través del arte, en concreto en las representaciones de *thangyat*. La fuente afirma que las representaciones de *thangyat* constituyen, desde hace generaciones, un foro para tratar cuestiones sociales y políticas a través de la sátira. En el presente caso, las actuaciones se transmitieron en Internet para promover el debate político en todo el país. De hecho, según la fuente, es la primera vez que se imputa a intérpretes de *thangyat* en Myanmar desde que comenzó la transición democrática.

56. El Grupo de Trabajo considera que las representaciones de *thangyat* del grupo, y su difusión en Internet, se enmarcan en el derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluida la expresión artística, que está protegido por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos<sup>20</sup>. Ese derecho protege la expresión aun en los casos en que pueda escandalizar, ofender o molestar<sup>21</sup>, insultar a un individuo o grupo<sup>22</sup> o criticar a una institución<sup>23</sup>, como las Fuerzas Armadas en el presente caso<sup>24</sup>. Como ya ha destacado el

<sup>18</sup> Opiniones núm. 46/2019, párr. 51; núm. 46/2018, párr. 48; núm. 36/2018, párr. 40; y núm. 10/2018, párr. 45.

<sup>19</sup> Opiniones núm. 82/2018, párr. 29; núm. 68/2018, párr. 39; núm. 30/2018, párr. 39; núm. 26/2018, párr. 54; núm. 10/2018, párr. 46; y núm. 3/2018, párr. 43 (en las que se determinó que la presentación de una orden judicial es un procedimiento inherente a lo dispuesto en los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en los principios 2, 4 y 10 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión).

<sup>20</sup> Conclusión corroborada por otros expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas. Véase, por ejemplo, A/72/382, párrs. 16 a 25; A/74/342, párr. 23; y A/HRC/43/59, párr. 18 (donde se hace referencia específicamente al grupo Peacock Generation). Véase el artículo 27, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que protege el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, y el artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que es parte Myanmar, que protege el derecho a participar en la vida cultural. Véase también Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general núm. 25 (2020), relativa a la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales, párr. 10, donde el Comité señaló que la cultura es un concepto inclusivo que comprende todas las expresiones de la existencia humana, y observación general núm. 21 (2009), relativa al derecho de toda persona a participar en la vida cultural.

<sup>21</sup> Véase, por ejemplo, la opinión núm. 33/2019.

<sup>22</sup> Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 4/2019 y 46/2013.

<sup>23</sup> Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 35/2012 (familia real) y núm. 7/2008 (un gobierno).

<sup>24</sup> El informe de la misión internacional independiente de investigación sobre Myanmar (A/HRC/39/64) contiene información general pertinente sobre las alegaciones relativas a las Fuerzas Armadas.

Grupo de Trabajo, la prisión por presuntamente difamar a otra persona nunca es compatible con la libertad de expresión<sup>25</sup>.

57. Además, el Grupo de Trabajo considera que la utilización por los miembros del grupo de las representaciones de *thangyat* para hacer comentarios sobre la política y el papel de las Fuerzas Armadas constituyó un ejercicio legítimo del derecho a participar en el gobierno, protegido por el artículo 21, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

58. Nada parece indicar que las limitaciones permitidas de los derechos mencionados, establecidas en el artículo 29, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, afecten a las conclusiones del Grupo de Trabajo en el presente caso. En particular, el Gobierno no ha presentado ninguna razón que pudiera haber legitimado cualquier restricción de los derechos mencionados. El Grupo de Trabajo no está convencido de que el enjuiciamiento de las seis personas fuera necesario para proteger un interés legítimo en virtud de esa disposición, ni de que las penas de prisión fueran una respuesta proporcionada a su participación en representaciones artísticas. No hay pruebas de que las críticas de la compañía a las Fuerzas Armadas llamasen, directa o indirectamente, a la violencia o puedan considerarse razonablemente una amenaza a la moral, el orden público o el bienestar general en una sociedad democrática. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y a la Relatora Especial sobre los derechos culturales.

59. El Grupo de Trabajo concluye que la detención de las seis personas resultó del ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de opinión y de expresión y de su derecho a participar en el gobierno, lo cual constituye una violación de los artículos 19 y 21, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su detención es arbitraria con arreglo a la categoría II.

60. Como ya ha subrayado el Grupo de Trabajo, el principio de legalidad exige que las leyes se formulen con suficiente precisión para que la persona pueda tener acceso a la ley, comprenderla y modificar su conducta en consecuencia<sup>26</sup>. El Grupo de Trabajo considera que la formulación del artículo 505 a) del Código Penal, que tipifica como delito la publicación o distribución de “cualquier declaración, rumor o noticia” con la intención de provocar que un miembros de las Fuerzas Armadas se amotine, pero que no ofrece definiciones claras de esos términos, no es suficientemente precisa y puede, como en el presente caso, proscribir el ejercicio pacífico de determinados derechos. Del mismo modo, el comportamiento prohibido en virtud del artículo 66 d) de la Ley de Telecomunicaciones, a saber, los actos que “molesten o amenacen a cualquier persona”, es tan genérico y poco preciso que una persona no podría determinar si su conducta quedaría comprendida en el ámbito del delito<sup>27</sup>.

61. La aplicación de disposiciones poco precisas y excesivamente genéricas en el presente caso otorga más peso a la conclusión del Grupo de Trabajo de que la detención de las seis personas se enmarca en la categoría II. El Grupo de Trabajo considera que, en algunas circunstancias, las leyes pueden ser tan poco precisas y excesivamente genéricas que es imposible invocar un fundamento jurídico que justifique la privación de libertad.

### iii) Categoría III

62. Habida cuenta de su conclusión de que la detención de las seis personas es arbitraria con arreglo a la categoría II, el Grupo de Trabajo hace hincapié en que no debería haberse celebrado ningún juicio y que no deberían iniciarse más actuaciones contra ellas en el futuro. Sin embargo, cada una de esas personas ya ha sido objeto de otros procedimientos, algunos de los cuales han concluido con fallos condenatorios y las correspondientes penas.

<sup>25</sup> Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 25/2012, párr. 60; y núm. 35/2008, párr. 36.

<sup>26</sup> Opinión núm. 41/2017, párrs. 98 a 101. Véase también la opinión núm. 62/2018, párrs. 57 a 59.

<sup>27</sup> Véase la opinión núm. 56/2013, párr. 11, en la que se calificó de vago y contrario al principio de legalidad el artículo 505 b) del Código Penal, de carácter similar. Véase también la resolución 40/29 del Consejo de Derechos Humanos, párr. 9.

La información presentada por la fuente pone de manifiesto que se ha infringido su derecho a un juicio imparcial durante esas actuaciones.

63. La fuente sostiene que se denegó injustificadamente la libertad bajo fianza a las seis personas y que la prisión preventiva debería ser el último recurso en los procedimientos penales. Según la fuente, no había fundamento para afirmar que los miembros del grupo representaban una amenaza para la sociedad o que no comparecerían cuando se les llamara a juicio. La fuente señala que, mientras que muchas otras personas detenidas por los mismos cargos han quedado en libertad bajo fianza, las seis personas del presente caso permanecieron en prisión preventiva. La fuente sostiene además que, aunque los delitos tipificados en el artículo 505 a) del Código Penal no permiten decretar la libertad bajo fianza, las seis personas tenían derecho a ella porque fueron arrestadas sin orden judicial. Según la fuente, el Código de Procedimiento Penal dispone que toda persona acusada de un delito para el que no se pueda decretar la libertad bajo fianza puede quedar en libertad bajo fianza si es arrestada o detenida sin orden judicial por un agente de policía.

64. El Grupo de Trabajo recuerda que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla<sup>28</sup>. Las normas internacionales de derechos humanos, incluidos los principios 38 y 39 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, establecen que toda persona detenida a causa de una infracción penal tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o puesta en libertad en espera de juicio. La decisión de detener a una persona antes del juicio debe basarse en una evaluación individual para corroborar que la detención sea razonable, necesaria y conforme a derecho. Al hacer esa evaluación, los tribunales deben estudiar si procede optar por alternativas a la detención como la libertad bajo fianza<sup>29</sup>.

65. El Gobierno no ha indicado que se estudiaran opciones distintas de la prisión preventiva ni ha explicado por qué se denegó la libertad bajo fianza. Nada indica que las seis personas presentaran riesgo de fuga, pudieran alterar las pruebas o representaran un peligro para la sociedad. Las seis fueron detenidas por un presunto delito de difamación de miembros de las Fuerzas Armadas, no por delitos violentos, y, como se ha señalado, su detención resultó del ejercicio de sus derechos legítimos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Aunque dos de ellas tenían condenas anteriores por organizar una manifestación —de las que posteriormente fueron indultadas—, las otras cuatro no tenían antecedentes penales. En particular, la denegación de la libertad bajo fianza se apartó claramente de las decisiones adoptadas anteriormente por algunos de los funcionarios encargados del arresto de dejar en libertad a los acusados si prometían comparecer en su primera audiencia, sin que se percibiera que pudieran plantear riesgo alguno mientras estaban en libertad. Dadas las circunstancias, el Grupo de Trabajo considera que mantener a las seis personas en prisión preventiva sin una explicación razonada y adecuada fue una medida innecesaria, desproporcionada e incompatible con su derecho a la presunción de inocencia, protegido por el artículo 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos<sup>30</sup>.

66. Para llegar a esa conclusión, el Grupo de Trabajo toma nota de que, según la fuente, los delitos tipificados en el artículo 505 a) del Código Penal no admiten fianza. En su jurisprudencia, el Grupo de Trabajo ha confirmado sistemáticamente que la prisión preventiva obligatoria para los delitos que no admiten fianza viola las obligaciones asumidas por los Estados en virtud del derecho internacional de los derechos humanos<sup>31</sup>. En particular, priva al detenido del derecho a solicitar opciones no privativas de la libertad, como la fianza. Además, la imposición de la prisión preventiva para determinados delitos

<sup>28</sup> A/HRC/19/57, párrs. 48 a 58. Véanse también las opiniones núm. 66/2011, párr. 39; y núm. 37/2007, párr. 45.

<sup>29</sup> Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal (A/HRC/30/37, anexo), directriz 15.

<sup>30</sup> Véanse también las opiniones núm. 68/2019, párrs. 94 a 96; núm. 3/2019, párr. 57; y núm. 66/2011, párr. 42.

<sup>31</sup> Opiniones núms. 24/2020, 21/2020, 19/2020, 8/2020, 68/2019, 64/2019, 14/2019, 75/2018, 61/2018, 53/2018, 16/2018, 1/2018, 24/2015 y 57/2014; y A/HRC/42/39/Add.1, secc. IV.A.1.

que no admiten fianza invierte la presunción de inocencia, de modo que los acusados de esos delitos quedan automáticamente detenidos sin que se estudie de manera equilibrada sus circunstancias individuales, en particular el riesgo de que puedan fugarse, alterar las pruebas o cometer un delito. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que modifique su legislación para eliminar la imposibilidad de obtener la libertad bajo fianza en el caso de determinados delitos.

67. Además, el Grupo de Trabajo considera que no se concedió a las seis personas el derecho a ser juzgadas dentro un plazo razonable, dado que pasaron un tiempo considerable en prisión preventiva. Puesto que fueron arrestadas en abril y mayo de 2019 y declaradas culpables en octubre y noviembre de 2019, parece que ese período tuvo una duración aproximada de seis meses. Como ya ha confirmado el Grupo de Trabajo, el carácter razonable de toda demora en enjuiciar una causa debe evaluarse teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, la complejidad del asunto, la conducta del acusado y la forma en que las autoridades tramitaron el asunto<sup>32</sup>. La demora en el enjuiciamiento de las seis personas fue inaceptablemente prolongada en las circunstancias particulares del presente caso, especialmente porque no había pruebas de que se hubieran estudiado opciones distintas de la detención. Además, como se ha señalado, es evidente que las seis personas nunca debieron haber sido detenidas por el ejercicio pacífico de sus derechos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, por lo que habría sido inaceptable demorarse en enjuiciarlas incluso por un período relativamente breve<sup>33</sup>. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que el hecho de que no se garantizara la celeridad de las actuaciones judiciales constituyó una violación de los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el principio 38 del Conjunto de Principios.

68. Por otro lado, la fuente afirma que en el presente caso se violó el derecho a un juicio imparcial porque los acusados comparecieron esposados ante el tribunal, cuando el uso de tales medios de coerción por la policía no estaba justificado. Puesto que el Gobierno no ha explicado por qué se utilizaron esos medios de coerción durante el juicio, el Grupo de Trabajo considera que el hecho de esposar a las seis personas constituyó una nueva violación, en concreto de su derecho a la presunción de inocencia, protegido por el artículo 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como ya ha señalado el Grupo de Trabajo, las personas acusadas de delitos no deben comparecer ante el tribunal de manera que parezca que son delincuentes peligrosos, pues ello menoscaba la presunción de inocencia<sup>34</sup>.

69. El Grupo de Trabajo expresa su preocupación por el hecho de que las múltiples causas incoadas contra cada uno de los seis acusados pueda significar que fueron condenados por tribunales de distintos municipios en relación con la misma representación de *thangyat*. La información proporcionada por la fuente no permite determinar claramente si los múltiples enjuiciamientos incoados en virtud del artículo 505 a) del Código Penal y el artículo 66 d) de la Ley de Telecomunicaciones se refieren o no a representaciones diferentes. Habida cuenta de que la fuente no se refirió a la cuestión de la doble incriminación, el Grupo de Trabajo no está en condiciones de llegar a una conclusión al respecto. No obstante, tomando en consideración que aún hay causas pendientes contra los miembros del grupo, el Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que se asegure de que ninguno de ellos haya sido o sea declarado culpable y condenado dos veces por los mismos hechos. Ello equivaldría a una violación del principio de doble incriminación y del derecho a un juicio imparcial, garantizado por el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos<sup>35</sup>.

<sup>32</sup> Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 16/2020, 15/2020, 8/2020 y 1/2020.

<sup>33</sup> Opinión núm. 46/2019, párr. 63 (el Grupo de Trabajo no estaba convencido de que existiera una violación de categoría II y no pudo establecer que una demora de 16 meses antes del juicio fuera irrazonable).

<sup>34</sup> Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 83/2019, párr. 73; núm. 36/2018, párr. 55; núm. 79/2017, párr. 62; núm. 40/2016, párr. 41; y núm. 5/2010, párr. 30.

<sup>35</sup> A/HRC/43/59, párr. 18 (en el que se tratan las múltiples querellas presentadas contra el grupo Peacock Generation).

70. El Grupo de Trabajo concluye que esas violaciones del derecho a un juicio imparcial fueron de una gravedad tal que confieren a la detención de las seis personas un carácter arbitrario con arreglo a la categoría III.

iv) Categoría V

71. El Grupo de Trabajo considera que las seis personas fueron detenidas por motivos discriminatorios, en concreto por su opinión política o de otra índole. Como se ha señalado, los miembros del grupo utilizaron las representaciones de *thangyat* para hacer comentarios sobre la política y la función de las Fuerzas Armadas, y fueron detenidos por hacerlo. En consecuencia, su detención se enmarca en la categoría V.

72. El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno a que ponga en libertad de forma inmediata e incondicional a las seis personas que han permanecido detenidas desde que se les denegó la libertad bajo fianza en abril y mayo de 2019. Habida cuenta de las graves violaciones de los derechos de esas seis personas, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar.

73. El Grupo de Trabajo agradecería tener la oportunidad de entablar un diálogo constructivo con el Gobierno para tratar con él la privación arbitraria de libertad. El 2 de octubre de 2019, el Grupo de Trabajo reiteró su anterior solicitud al Gobierno para realizar una visita al país, y seguirá tratando de obtener una respuesta positiva. Teniendo en cuenta que el tercer ciclo de examen de Myanmar en el contexto del mecanismo de examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos tendrá lugar en enero de 2021, es un momento oportuno para que el Gobierno refuerce su cooperación con los mecanismos de los procedimientos especiales del Consejo.

### Decisión

74. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Zayar Lwin, Paing Phyo Min, Zaw Lin Htut, Kay Khine Htun, Paing Ye Thu y Su Yadana Myint es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 3, 7, 9, 10, 11, 19 y 21, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y se inscribe en las categorías I, II, III y V.

75. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Myanmar que adopte las medidas necesarias para remediar sin dilación la situación de las seis personas mencionadas y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo alienta al Gobierno a que se adhiera al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

76. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a las seis personas inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional. En el contexto actual de la pandemia mundial de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la amenaza que plantea en los lugares de detención, el Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno a que adopte medidas urgentes para garantizar su liberación inmediata.

77. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de las seis personas y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

78. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que modifique sus leyes, en particular el artículo 505 a) del Código Penal y el artículo 66 d) de la Ley de Telecomunicaciones, para adaptarlas a las recomendaciones formuladas en la presente opinión y asegurar su conformidad con las obligaciones contraídas por Myanmar en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

79. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso a: a) la Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión; b) la Relatora Especial sobre los derechos culturales; y c) el Relator Especial

sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, para que tomen las medidas correspondientes.

80. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

#### **Procedimiento de seguimiento**

81. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad a las seis personas mencionadas y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se les han concedido indemnizaciones u otras reparaciones;
- c) Si se ha investigado la violación de sus derechos y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Myanmar con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

82. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

83. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

84. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado<sup>36</sup>.

*[Aprobada el 24 de agosto de 2020]*

---

<sup>36</sup> Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.